
UNA REPÚBLICA ENTRE DOS CENTENARIOS

Alfredo Riquelme Segovia

INTRODUCCIÓN

La historia de Chile entre 1910 y 2010 puede ser comprendida como de surgimiento, materialización y metamorfosis de sucesivos intentos –reformadores y revolucionarios– orientados a dar respuesta a los grandes desafíos planteados con ocasión del centenario de la independencia. En esa respuesta están contenidos los esfuerzos por alcanzar el desarrollo (económico y humano) y la democracia (política y social) insertos en una larga transición hacia la modernidad, iniciada entre 1810 y 1910 con la configuración del Estado nacional republicano.

Los esfuerzos por impulsar el desarrollo y la democracia dieron lugar, durante la primera mitad del segundo siglo de vida republicana, a severos conflictos, así como a importantes acuerdos. En medio de unos y otros, Chile progresó –como lo muestran los indicadores económicos, sociales y culturales de la época–, pero insuficientemente respecto de las necesidades y expectativas de la sociedad (aunque la ciudadanía y la inclusión social se extenderían gradualmente, la marginación de muchos continuaría). Finalmente, durante la década de 1960 y hasta 1973, la confrontación entre opuestos proyectos orientados a alcanzar una ampliación de la democracia y, a la vez, el desarrollo, condujo a un retroceso autoritario y a un cambio del modelo económico, conducido por las elites opuestas a tales proyectos. En ese marco, la violencia del golpe militar, la destrucción de las instituciones democráticas y la racionalidad bélica que la dictadura aplicó a sus adversarios durante una larga permanencia en el poder, se tradujo en sistemáticas violaciones de los derechos humanos, con el consiguiente quiebre de la noción de compartir una misma comunidad nacional.

La recuperación de la democracia en 1990 estuvo acompañada de amplios consensos, pero también de importantes disensos, en el marco de un proyecto de restablecimiento y renovación de una comunidad nacional compartida (no unificada, sino fundada en la unidad de la diversidad), que afirmara su identidad, al tiempo que se abriera al entorno regional y global.

Pero esa comunidad imaginada, en la medida que estaba enraizada en una sociedad reconfigurada estructuralmente por la metamorfosis neoliberal impuesta por la dictadura, ha sido vivida de maneras no sólo diferentes, sino cruzadas por una desigualdad socioeconómica y una asimetría de poder sistémicas, que reproducen severas fragmentaciones y persistentes antagonismos.

Al estar llegando al bicentenario, reflexionar acerca de lo alcanzado y lo frustrado en un siglo de esfuerzos por la democracia y el desarrollo, constituye un punto de partida para pensar nuevas metas, renovadas políticas o nuevos proyectos transformadores para seguir avanzando como país.

DE LA FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD CHILENA A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REPÚBLICA

Si la historia de Chile como nación y república comenzó hacia 1810, mucho más larga es su historia como sociedad y entidad cultural.

En ese sentido, la formación histórica de la actual sociedad chilena se remonta a la instalación de los conquistadores españoles en el Valle Central durante la segunda mitad del siglo XVI. A la ocupación del territorio, situado entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, se sumaría la dominación, al norte del río Biobío, de los pueblos indígenas que lo habitaban.

En los siguientes siglos de la época colonial, que se extienden hasta 1810, se produce en ese espacio geográfico un vasto proceso de mezcla y distinción étnica y social, que conformaría una sociedad estratificada en que el elemento hispánico y sus descendientes ocuparon las posiciones dominantes.

Del encuentro originario, caracterizado por la confrontación y la dominación, a la vez que por el mestizaje y la interdependencia, surgiría una sociedad basada en una enorme asimetría de poder, así como en la subordinación y discriminación étnica y social de los componentes de impronta indígena.

Esa historia de inequidad —no pocas veces de iniquidad— aún continúa, a pesar de los progresos sociales del siglo XX y de nuestros días. Incluso, algunas de las formas adoptadas por el progreso económico del país han articulado nuevas inequidades e iniquidades sobre esas antiguas fracturas.

Por eso, pese a los esfuerzos de todo un siglo, la cuestión social no ha dejado de existir. Y el problema de las relaciones interétnicas ha vuelto a plantearse con fuerza en estos últimos años.

Con todo, ese Chile arcaico, resistente a quedar en el pasado, ha sido progresiva y gradualmente transformado por la construcción nacional y republicana del siglo XIX, así como por la ampliación de la ciudadanía, la aspiración a la justicia social y la lucha por la democracia y los derechos humanos que caracterizaron al pasado siglo XX.

Aun así, como advertíamos, ese progreso no ha sido rectilíneo, continuo ni fácil.

Hasta el siglo XXI ha llegado asimismo un legado de dominaciones, exclusiones y discriminaciones originadas algunas en la época colonial y otras en el curso de la propia modernización.

En medio de esas tensiones, inherentes a las sociedades contemporáneas, nuestra historia nacional y republicana ha estado atravesada, desde sus orígenes, por la voluntad de progreso democrático y de expansión de las libertades.

La transformación de la sociedad colonial en un Estado nacional independiente, a partir de 1810, correspondió a la voluntad de los criollos, como se denominaba a los descendientes de españoles, situados en la cima de la estructura social, de asumir la dirección política de una sociedad hasta entonces dirigida por los representantes de la metrópoli.

Asimismo, la independencia involucró una transformación revolucionaria de la organización política de la sociedad, desde una monarquía absoluta hacia una república constitucional,

caracterizada por la soberanía de la ciudadanía y la división de los poderes del Estado.

De ese modo, la independencia hizo de Chile un Estado soberano, que abrió el país al mundo, económica y culturalmente, más allá de los límites establecidos por el viejo imperio, e inició la transformación del orden político, desde el absolutismo del Antiguo Régimen hacia una república fundada en los ideales de la modernidad. Sin embargo, se conservó la estratificación social heredada de la época colonial, la cual sólo comenzaría a modificarse muy lentamente en el curso del siglo XIX.

Esa estructura social pesaría gravemente sobre las aspiraciones liberales y democráticas de los protagonistas de la independencia, ralentizando el progreso político y social durante el siglo XIX e incluso gran parte del XX. Ello hizo que el camino a la ciudadanía fuera largo y difícil para las mayorías nacionales¹.

Por otra parte, el cambio provocado por la independencia respecto a la relación de la sociedad chilena con el mundo, posibilitó una mayor exposición de esta a las influencias modernizadoras y liberales de Europa y Norteamérica, en los ámbitos cultural, político y económico².

Al conquistar su independencia, el país enfrentó la gran tarea histórica de los Estados nacionales en formación: crear un orden legítimo y efectivo, es decir reconocido por la ciudadanía, y al mismo tiempo dotado de la capacidad de hacer respetar sus normas, instituciones y autoridades en todo el territorio de la nueva república. En ese marco, los años de aprendizaje político liberal fueron seguidos por la imposición del autoritarismo presidencial de cuño conservador.

Con el desarrollo de actividades como la minería y el comercio exterior, así como con la ampliación y modernización

¹ Aunque no existe una obra que presente sistemáticamente la trayectoria de la ciudadanía en Chile, el reciente libro de Renato Cristi y Pablo Ruiz-Tagle *La República en Chile. Teoría y práctica del constitucionalismo republicano*, Lom, Santiago, 2006, es una excelente y actualizada síntesis de la evolución del marco institucional en que la ciudadanía y sus metamorfosis se han desplegado.

² Véase Fernando Purcell y Alfredo Riquelme (editores): *Ampliando miradas. Chile y su historia en un tiempo global*. Ril Editores - Instituto de Historia PUC, Santiago, 2009.

del artesanado, la elite criolla diversificaba sus actividades económicas, tradicionalmente rurales, y nuevos grupos emergían en las ciudades más pujantes del país. Estos querían hacer oír su voz en la deliberación pública acerca de los destinos de la nación. Asimismo, el progreso de la educación y la exposición a las ideas circulantes en el mundo, junto al aporte de inmigrantes de América y Europa, dieron origen a una generación de intelectuales y literatos que hacían suyo el liberalismo. Todos ellos se transformarían en protagonistas de la lucha por un nuevo orden constitucional más afín a las nuevas ideas.

Aunque no tuvieron éxito en su meta de dar a Chile una nueva Constitución, los liberales de 1842, los igualitarios de 1850 y los radicales de 1859 hicieron posible con sus luchas las reformas constitucionales que, en la década de 1870, configuraron una institucionalidad en que convivieron, en el disenso y en los acuerdos, con nacionales y conservadores.

Es así como, a lo largo del siglo XIX, Chile se consolidó como república constitucional, transitando, no sin conflictos, del autoritarismo presidencial al liberalismo parlamentario. La elite criolla se diversificaría en sus actividades económicas, sumando la agricultura y la ganadería, y dando un poderoso impulso a la minería y al comercio interior y exterior. Se agregaron a ella algunos representantes de la clase media e inmigrantes afortunados. Las ciudades crecieron en importancia y se transformaron en el espacio de modernización de las elites y del desarrollo de las clases medias y los sectores populares urbanos.

En esas circunstancias, el país enfrentó una prueba tan dura como la guerra con los vecinos del norte, entre 1879 y 1884, sin restricciones a las libertades y con un amplio debate público. Asimismo, por esos años, el sistema político pudo procesar institucionalmente y sin más violencias que las verbales el antagonismo entre laicidad y confesionalidad que conduciría a las Leyes de Matrimonio Civil, de Cementerios Laicos y de Registro Civil, con pleno respeto a los derechos de la ciudadanía y de la Iglesia Católica.

Sin embargo, la convivencia política se fracturaría gravemente pocos años después, al estallar la Guerra Civil de 1891, cuando varios grupos liberales y radicales se unieron a los conservadores en la lucha contra el presidencialismo modernizador

del Presidente Balmaceda. La confrontación terminaría con el triunfo de los opositores, muriendo en ella entre seis mil y diez mil chilenos de ambos bandos.

La Guerra Civil de 1891 fue el episodio final y trágico de los conflictos políticos característicos del siglo XIX chileno. Después de ella, esas disputas irían siendo desplazadas por las que caracterizarían al siglo XX, centradas en lo que entonces comenzaba a llamarse la cuestión social.

EL CHILE DEL CENTENARIO

Al comenzar el siglo XX y aproximarse a completar en 1910 un siglo del inicio de la revolución y la guerra que habían hecho del país una república independiente (1810-1818), la sociedad chilena seguía conservando no pocas características heredadas de la época colonial. Sobre todo, continuaba estando fuertemente estratificada sobre líneas socioeconómicas, a la vez que «pigmentocráticas», ocupando una oligarquía criolla —ligeramente ampliada con algunos elementos provenientes de la migración europea y de la prosperidad asociada a las nuevas actividades productivas y comerciales— las posiciones dominantes en todos los ámbitos.

La hegemonía política de esa oligarquía ampliada y diversificada durante el siglo XIX, organizada políticamente en varias facciones liberales y una conservadora, se había afianzado tras la Guerra Civil de 1891, abriendo el camino a una república parlamentaria en la cual esas facciones compartían y se alteraban en el poder.

Por otra parte, durante la segunda mitad del siglo XIX, la República de Chile había alcanzado los límites geográficos que conserva hasta la actualidad. La delimitación de la frontera con la República Argentina en la Zona Austral, la ocupación de los territorios mapuches en el sur y la incorporación —tras la guerra que enfrentó al país con Perú y Bolivia entre 1879 y 1884— de las actuales regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, al norte del país, habían sido los principales hitos de ese proceso.

Desde entonces, la historia de Chile se ha desplegado sobre los 756.946 km² de su territorio continental, extendido de

norte a sur 4.200 km y entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico con un ancho promedio de apenas 140 km, donde se distinguen el desértico Norte Grande (Arica, Tarapacá y Antofagasta), el semiárido Norte Chico (Atacama y Coquimbo), la Zona Central, de clima mediterráneo (Valparaíso, Santiago, O'Higgins y Maule), el lluvioso Sur (Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos) y la fría Zona Austral (Aysén y Magallanes)³.

En ese territorio, según el censo realizado en 1907, vivía una población de algo más de 3,2 millones de habitantes, de los cuales cerca de un 60% era analfabeto y un 57% residía en el sector rural.

La incorporación de las nuevas regiones del norte permitió un enorme incremento de los recursos del país, al desarrollarse en ellas la explotación del salitre, del cual Chile tenía el monopolio de la producción mundial en una época caracterizada por el gran incremento de la demanda de fertilizantes para una agricultura en expansión en todo el planeta. A cargo principalmente de compañías inglesas y alemanas, el Estado obtuvo una parte de sus enormes ganancias de la tributación impuesta a esas empresas. El desarrollo de la economía salitera estaría en la base de varios procesos que transformarían a la sociedad chilena en más compleja, moderna y diversificada durante el cambio de siglo.

Aunque hacia principios del siglo XX el sector manufacturero mostraba signos de cierta expansión —al igual que la agricultura, el transporte, el comercio, las comunicaciones, la actividad financiera y la minería del cobre—, indudablemente el salitre era el soporte principal de la economía chilena, pues concentraba el grueso de las exportaciones y de los ingresos fiscales.

Durante las dos últimas décadas del siglo XIX y los dos primeros decenios del XX, un Estado ampliado —gracias a los ingresos provenientes del salitre— multiplicaría el impulso a las obras públicas y a la educación, al tiempo que modernizaría

³ El territorio chileno se extiende a varias pequeñas islas, como las del archipiélago de Juan Fernández, situado a 600 km del continente, y la de Pascua, a más de 3.500 km. Asimismo, Chile reclama soberanía sobre una superficie de 1.250.257 km² en la Antártida.

las Fuerzas Armadas y aumentaría los empleos fiscales para los sectores medios.

El fortalecimiento social y cultural de esos sectores —particularmente profesionales, profesores y militares—, junto a la emergencia de una extensa y organizada clase obrera en torno a los yacimientos y puertos de la región salitrera, así como en las ciudades del centro y sur del país, unido al crecimiento de estas, modificaría la estructura social, así como los términos y protagonistas del proceso político.

Durante la primera década del siglo XX, e inspirado en diversas corrientes ideológicas socialistas, el movimiento obrero se había comenzado a organizar, sindical y políticamente, logrando insertarse marginalmente en las instituciones representativas del sistema político, a la vez que enfrentaba el hostigamiento e incluso la violencia del Estado al desbordar sus demandas y movilizaciones lo tolerado por la elite oligárquica y por una opinión pública burguesa que cerraba filas en torno a la defensa del orden público. La extrema violencia que, en ocasiones, alcanzaba la represión costó la vida de cientos de trabajadores en acontecimientos como la matanza en la Escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907.

La conferencia del obrero tipógrafo y líder del ala socialista del Partido Demócrata, Luis Emilio Recabarren, «Ricos y pobres a través de un siglo de vida republicana», expresaría en el año del centenario la identidad de un movimiento obrero en formación que llegaría a vislumbrar en la revolución social el acontecimiento que derribaría el orden existente y abriría paso a la construcción de una nueva sociedad.

La revolución, entendida como un cambio radical del orden político, social, económico y cultural que abriría una nueva era, dejaba así de ser un referente del pasado, para convertirse en un horizonte de futuro para los desposeídos.

La unidad de la nación y de la república creada por la revolución de la independencia era problematizada por Recabarren desde la perspectiva del antagonismo entre las clases sociales:

No es posible mirar la nacionalidad chilena desde un solo punto de vista, porque toda observación resultaría incompleta. Es

*una culpa común que existan dos clases sociales opuestas, y como si esto fuera poco, todavía tenemos una clase intermedia que complica más este mecanismo social de los pueblos*⁴.

*La última clase, como puede considerarse en la escala social, a los gañanes, jornaleros, peones de los campos, carretoneros, etc., vive hoy como en 1810... no existe ni un solo progreso social...*⁵.

*La fecha gloriosa de la emancipación del pueblo no ha sonado aún*⁶.

Esa «emancipación del pueblo» sería el fruto de la futura «revolución social».

Poco después de encabezar la fundación del Partido Obrero Socialista (POS) en 1912, Recabarren explicitaría el horizonte utópico en que se situaba el nuevo sujeto político:

*El Partido Obrero Socialista expone que el fin de sus aspiraciones es la emancipación total de la Humanidad, aboliendo las diferencias de clases y convirtiendo a todos en una sola clase de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes, y la implantación de un régimen en que la producción sea un factor común y común también el goce de los productos. Esto es, la transformación de la propiedad individual en propiedad colectiva o común*⁷.

En 1921, pocos meses antes de que el POS se transformara en Partido Comunista de Chile, Recabarren todavía afirmaba

⁴ Luis Emilio Recabarren: «Ricos y pobres a través de un siglo de vida republicana». Citado por Bárbara Silva: *Simbolos y discursos en torno a la nación. Patria Vieja y Centenario*. Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad Católica de Chile, 2004, p. 137.

⁵ *Ibidem*, p. 139.

⁶ Luis Emilio Recabarren: «Ricos y pobres a través de un siglo de vida republicana». En Luis Emilio Recabarren: *Obras escogidas*, tomo I. Editorial Recabarren, Santiago, 1965, p. 78.

⁷ Citado por Julio Pinto V.: *Desgarros y utopías en la pampa salitrera. La consolidación de la identidad obrera en tiempos de la cuestión social (1890-1923)*. Lom, Santiago, 2007, p. 133.

que la revolución sería tal más por la radicalidad de sus fines que por la violencia de sus medios:

Yo, lo digo con toda sinceridad, no quiero la revolución en la forma que vosotros la entendéis, en forma sangrienta, con cañones... Yo he dicho y predicado siempre que nuestra revolución tiene que ser la revolución de los brazos cruzados, del paro general, para obligar a las clases poderosas a ser morales en sus costumbres, a ser justos en todos los aspectos de la vida social, con los hombres que trabajan, con los que van ascendiendo en cultura, con los que quieren ser más útiles, con los que quieren ser más íntegramente ciudadanos⁸.

Desde entonces, la esperanza de tantos en esa revolución por la justicia social coexistiría difícilmente en Chile con el rechazo violento que esa expectativa provocara en otros, y oscilaría entre la lejanía y la cercanía a la convicción de muchos de que la misma finalidad podría lograrse de un modo más indoloro a través de políticas reformadoras.

Hacia 1910, con motivo del centenario, fueron varios los ensayistas que realizaron un diagnóstico crítico de la realidad nacional, apuntando sus dardos contra la pobreza, la extrema inequidad de las relaciones laborales, el desamparo ante la enfermedad y la vejez, así como denunciando las graves carencias de vivienda, urbanización, salud y educación sufridas por las clases populares. Asimismo, alertaron acerca de la desigual distribución de los frutos del progreso, y denunciaron la asimetría de poder entre la oligarquía y la ciudadanía en la sociedad y en las instituciones.

El profesor de francés Alejandro Venegas publicaría—con el seudónimo de Julio Valdés Cange— *Sinceridad. Chile íntimo en 1910*. En este libro afirmaba:

Todos los oligarcas, todos los explotadores tiemblan al solo nombre del anarquismo, y sin embargo no sólo no se piensa en

prevenirlo, sino que se le busca y se le provoca. El anarquismo es el fruto del hambre, del frío, de la miseria, de la ignorancia y de la abyección que ya tiene desesperado a los más, a causa de la codicia, la rapiña y la inhumanidad de los menos⁹.

Por su parte, Juan Enrique Concha, abogado y político conservador, pionero del cristianismo social en Chile, el 10 de septiembre de 1910 publicaba en el diario conservador *La Unión* su artículo «La principal obra social», en el que afirmaba:

Si se quiere conocer la causa única—me atrevo a decirlo por la experiencia de cerca de 20 años—de la enorme y pasmosa mortalidad de niños, del desarrollo de la tuberculosis, de la embriaguez que todo lo mata en Chile, trabajo, ahorro, familia, que engendra todos los vicios y desarrolla la criminalidad en chicos y grandes, no es necesario pensar mucho, ni leer demasiado, basta con dar unos cuantos pasos y saltar por entre charcos inmundos y llegar a la morada del pobre¹⁰.

A partir de las palabras escritas en torno al centenario por críticos como los citados¹¹, fue generalizándose en el país la conciencia sobre la cuestión social, que en las siguientes décadas condujo al fortalecimiento de amplios movimientos políticos y sociales que se propusieron enfrentarla a través de políticas públicas y proyectos reformadores que darían forma al progreso democrático y social de Chile.

⁸ Citado en Bárbara Silva: *Símbolos y discursos en torno a la nación. Patria Vieja y Centenario*. En AA. VV.: *Tests Bicentenario 2004*. Comisión Bicentenario, Santiago, 2005, p. 107.

¹⁰ Rodrigo Hidalgo et al.: «Las viviendas de la beneficencia católica en Santiago: instituciones constructoras y efectos urbanos (1890-1920)». En *Historia*. Santiago, diciembre de 2005, vol. 38, n° 2, pp. 327-366.

¹¹ Acerca de otros críticos que hicieron suya la preocupación por la cuestión social en la época del centenario, cfr. Nancy Nicholls Lopeandía: «Intelectuales liberales relevantes frente a la cuestión social en Chile (1890-1920): una minoría a favor del cambio». En *Historia*. Santiago, 1995-1996, vol. 29, n° 2, pp. 295-356.

⁹ Luis Emilio Recabarren: «Los albores de la revolución social en Chile». Sesión de la Cámara de Diputados del 15 de julio de 1921. En Luis Emilio Recabarren, op. cit., tomo I, p. 33.

DEL CENTENARIO AL SESQUICENTENARIO: HACIA LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA

En un contexto de turbulencias económicas, durante las décadas de 1920 y 1930, movimientos protagonizados por los sectores medios y populares desafiaron las características oligárquicas del orden político y social existente, desde posiciones democráticas, nacionalistas, socialcristianas y socialistas, congruentes con las ideologías que inspiraban el debate político y social en el mundo de la época.

Los movimientos expresivos de las clases medias cubrirían un amplio espectro ideológico y establecerían vínculos con sectores oligárquicos y populares en que los límites sociales hacia arriba y hacia abajo eran bastante difusos.

El decimonónico, mesocrático y anticlerical Partido Radical (PR) transitaría hacia un liberalismo social o incluso a un socialismo reformista desde comienzos del siglo xx. El PR forjaría una alianza con el sector reformador del liberalismo que conduciría a la Presidencia de Arturo Alessandri (1920-1925). Esa alianza duraría hasta mediados de la década de 1930, cuando durante el segundo gobierno de Alessandri (1932-1938), este y el conjunto de los liberales cerraron filas en la derecha.

Pactada la separación entre la Iglesia Católica y el Estado, reafirmada en la Constitución de 1925, las divisiones entre los segmentos liberal y conservador de la elite tradicional tendieron a disminuir, al tiempo que el desafío representado por los movimientos políticos y sociales emergentes los condujo a una posición conjunta de defensa de un orden económico basado en la intangibilidad de la propiedad y del mercado, un orden social asentado en las jerarquías históricamente establecidas, y un orden político republicano, pero limitadamente democrático.

Entre 1924 y 1932, los oficiales de las Fuerzas Armadas se habían convertido en portadores y ariete de las aspiraciones y preocupaciones mesocráticas, tanto frente a las resistencias de *los de arriba* como ante la amenaza revolucionaria de *los de abajo*. Fue la hora de un nacionalismo militarista y social que, entre 1924 y 1925, coincidió con el liberalismo social y civilista del primer Alessandri en cambiar la Constitución Política del Estado para establecer una democracia presidencialista, así como

introducir reformas laborales y sociales que reconocieron —a la vez que regularon— la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, introduciendo, además, las primeras bases de un sistema de protección social estatal.

La ruptura entre Alessandri y los militares condujo a la Presidencia a uno de sus líderes, Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931), quien intentó impulsar una modernización autoritaria —aunque frustrada por los devastadores efectos de la crisis económica mundial de 1929— y echaría las bases de un Estado modernizado capaz de intervenir en lo económico y lo social.

Tras el derrocamiento de Ibáñez por una sostenida movilización ciudadana en 1931, y después de un período de inestabilidad que incluyó el intento de establecer una República Socialista en 1932, el otro principal líder de la juventud militar de los veinte, Marmaduke Grove, sería uno de los fundadores del Partido Socialista (ps) en 1933.

El ps expresaría el encuentro entre populistas, socialistas democráticos y marxistas antiestalinistas, provenientes de las clases medias y de los sectores populares, en torno a un programa de transformación revolucionaria del orden económico y social basado en lo que denominaría un «marxismo enriquecido por el constante devenir social».

El comunismo chileno emergería de la persecución a la que fuera sometido por la dictadura de Ibáñez muy debilitado en su organización y en sus vínculos con la sociedad, a la vez que blindado ideológicamente al hacer suya integralmente la versión del marxismo revolucionario, propia de la Internacional Comunista. El viraje de la Internacional en 1935 hacia amplias alianzas antifascistas y la consiguiente colaboración con partidos socialistas y reformistas mesocráticos, junto con abrir las puertas al Frente Popular, permitiría a los comunistas expandir su influencia —hasta entonces circunscrita a la clase obrera— hacia intelectuales y otros sectores medios.

Durante la década de los treinta, los jóvenes más promisorios del conservadurismo chileno, universitarios y profesionales provenientes de la elite tradicional o de sectores medios emergentes, se escindirían del socialmente tradicionalista y económicamente liberal Partido Conservador, para conformar,

en 1938, con el nombre de Falange Nacional, una nueva fuerza política orientada por el catolicismo social.

Por otra parte, ese mismo año llegó a su clímax la dura confrontación del segundo gobierno de Arturo Alessandri (1932-1938), sostenido por los partidos Liberal y Conservador, con el ibañismo y el movimiento naciente (que utilizaba la *c* para distinguir de los nazis alemanes, con los que, sin embargo, se identificaba en varios aspectos) que combatían con igual fuerza a la izquierda como a la derecha, inspirados en un nacionalismo autoritario y populista.

La matanza de decenas de nacistas en el curso del aplastamiento de un *putsch* contra Alessandri y a pocas semanas de las elecciones presidenciales en que aquellos apoyaban a Ibañez, condujo al retiro de su candidatura, lo que acabó por configurar el escenario en que el abanderado de la derecha liberal-conservadora sería derrotado por el candidato del Frente Popular, que agrupaba a los partidos Radical, Socialista y Comunista, junto a otras formaciones menores.

El triunfo del radical Aguirre Cerda, en 1938, abrió un ciclo de cerca de un decenio de gobiernos de coaliciones de centro-izquierda y Presidentes radicales. Tras el fallecimiento del Presidente en 1941 fue electo Juan Antonio Ríos, quien también moriría durante su mandato. El mandatario elegido entonces, Gabriel González Videla (1946-1952), pondría abrupto fin a la alianza del radicalismo con la izquierda, influido por el desencadenamiento de la Guerra Fría, al expulsar del gobierno a los comunistas en 1947 y proscribirlos en 1948, mediante la llamada Ley de Defensa Permanente de la Democracia, más conocida como la «Ley maldita», que se mantuvo vigente hasta 1958.

La crisis económica mundial de 1929 había obligado a un cambio en la estrategia de desarrollo. Aunque todavía está abierto el debate acerca de cuándo la economía chilena se recuperó de la crisis y cuándo comenzó exactamente la industrialización basada en la sustitución de importaciones (isi), el hecho es que, aún a fines de la década de 1930, el PIB chileno era inferior en un 7% al de 1929.

Fue bajo el gobierno de Aguirre Cerda (1938-1941) cuando se dejaría atrás definitivamente el anterior modelo, iniciándose una nueva época en la economía del país que se extendería

cerca de tres décadas. Se impulsó la industrialización del país, centrada en el sector energético y en la sustitución de importaciones. El Estado desempeñaría un papel central en este esfuerzo, como agente productivo directo en la electricidad y el petróleo, así como en el transporte, la siderurgia, la banca y las comunicaciones. Asimismo, establecería fuertes protecciones arancelarias a la producción nacional, al tiempo que asumiría funciones reguladoras de las relaciones laborales.

De ese modo, mientras buena parte del mundo sufría las tragedias sumadas del totalitarismo, la ocupación militar extranjera, la guerra y el exterminio masivo, en nuestra propia América las dictaduras oligárquicas o populistas hacían tabla rasa de las libertades ciudadanas. En Chile, los gobiernos de coalición de centro-izquierda, encabezados por los Presidentes radicales Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos, pusieron en marcha un proyecto nacional modernizador, democratizador e incluyente que hizo progresar al país.

En esa época se configuró una red de instituciones estatales de salud, previsión, crédito y vivienda, que favoreció principalmente a los trabajadores asalariados de los sectores público y privado. En ese contexto, el gasto público social, como porcentaje del PIB, subió de 2,1% en 1925 a 17,9% en 1955, y a 25,8% en 1972.

En el campo educacional continuó la expansión de la matrícula en todos los niveles, mientras se creaban instituciones para apoyar, con alimentación y útiles, a los estudiantes de menores recursos. La alfabetización pasaría de un 58,3% en 1940 a un 82,4% en 1960, y a un 89,8% en 1970.

Entre las décadas de los cuarenta y de los sesenta, la industria creció y se diversificó, alcanzando entre 1940 y 1970 un crecimiento promedio anual de 5,2%, mientras el PIB sólo lo hacía a un ritmo de 3,8% por año. Con todo, el esfuerzo industrializador fue parcialmente exitoso, y el país siguió dependiendo fuertemente, como sucesor del salitre, de la explotación del cobre, como su principal riqueza, en poder de empresas norteamericanas. Ello trajo consigo inflación y crisis recurrentes en las finanzas públicas y en la balanza de pagos.

En estas décadas, la tasa de urbanización, que venía sufriendo sostenidamente a lo largo del siglo, experimentó una

aceleración que la elevaría a 60% hacia 1950 y a más de un 70% durante la década de 1960.

Fue en esos espacios urbanos donde se llegaría a constituir un rico y complejo tejido social imbricado estrechamente con el político. Entre 1932 y 1970, la cantidad de trabajadores sindicalizados se decuplicó, al pasar de 54.800 a 551.000, mientras el número de sindicatos creció de 421 a 4.001 en igual lapso. Por su parte, los gremios empresariales mantendrían una gran influencia, así como los colegios profesionales en que se organizaba la clase media ilustrada.

La entrada en escena de nuevos actores sociales y la metamorfosis de los que se habían incorporado transformó también las maneras de pensar e imaginar la nación, incluyendo en su representación a los actores históricamente excluidos. En ello sería decisivo el papel de una pléyade de intelectuales y artistas, hombres y mujeres de origen mesocrático y popular, urbano y rural, que llegaría a ser el segmento más dinámico de la elite cultural. Ese origen y esa trayectoria tuvieron los dos premios Nobel de Literatura chilenos del siglo xx, Gabriela Mistral (1945) y Pablo Neruda (1971).

Durante ese período, la modernización y democratización de la sociedad en las ciudades y en las regiones mineras contrastaría cada vez más con las formas de producción y las relaciones sociales tradicionales que se conservaban en el sector rural, donde la misma sindicalización de los campesinos estaría legalmente prohibida hasta mediados de la década de 1960.

La aceleración del proceso migratorio del campo a las ciudades, donde se fue concentrando progresivamente el grueso de la población del país, provocó el agravamiento del fenómeno de la marginalidad urbana, situado en la periferia de las grandes ciudades. Ni la economía ni las políticas públicas dieron abasto para integrar a una población en expansión caracterizada por precarias condiciones de trabajo, vivienda, nutrición y salud.

Las limitaciones del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones y de la red de protección social del Estado para satisfacer las necesidades de los nuevos habitantes urbanos, así como los efectos de la inflación sobre los asalariados de las clases trabajadora y media, sumados a la constante pugna

entre los distintos sectores productivos por lograr privilegios del Estado regulador, se sumaron para producir, desde fines de la década de 1940, un amplio descontento social que terminaría desbancando del poder al Partido Radical.

Es así como, en 1952, el antiguo dictador Carlos Ibáñez se impondría en las elecciones presidenciales al frente de una variopinta coalición de grupos populistas y nacionalistas más una fracción del socialismo.

Sin embargo, bajo el gobierno de Ibáñez —esta vez respetuoso de la Constitución de 1925— los problemas económicos y sociales continuaron sin resolverse, lo que motivó la disolución de la coalición que lo había llevado al poder y un incremento del descontento popular que se traduciría, en abril de 1957, en una explosión de violencia social severamente reprimida por la policía y efectivos militares, con un saldo de decenas de víctimas fatales.

El proyecto que comenzara a desplegarse en 1938 no pudo seguir adelante con todo su potencial por las presiones que el estallido de la Guerra Fría en 1947 ejerció sobre el proceso político chileno. Se abrió entonces una brecha entre el centro y la izquierda, cuya unidad no se volvería a restablecer verdaderamente hasta la década de 1980, después de la destrucción de la democracia y largos años de dictadura con predominio absoluto de la derecha.

En ese contexto, en las elecciones de 1958 se impondría estrechamente el candidato de la derecha: el ingeniero independiente Jorge Alessandri, hijo del antiguo Presidente, quien fue apoyado por los partidos Conservador y Liberal, con un 32%. Alessandri sería seguido muy de cerca por el candidato de la izquierda, el médico socialista Salvador Allende, respaldado por su partido, por el Partido Comunista y por otras formaciones menores integradas en el Frente de Acción Popular (FRAP), creado en 1956, alcanzando una votación de un 29%. El tercer lugar, con un 21%, sería para el abogado y líder del falangismo, desde la década de 1930, Eduardo Frei Montalva, respaldado por el Partido Demócrata Cristiano (pdc), fundado en 1957 mediante la fusión de la Falange con la tendencia socialcristiana del conservadurismo y con formaciones menores surgidas de la disolución del populismo ibañista. El candidato

del otrora hegemónico Partido Radical quedaría relegado al cuarto lugar, con un 15% de los votos.

El gobierno de Jorge Alessandri no lograría emprender la modernización capitalista de la economía que se había propuesto, debido a las propias resistencias del empresariado nacional, consolidado al alero del Estado proteccionista, regulador e interventor construido por los radicales y el ibañismo. A ello se sumaría la alianza que debió establecer con el radicalismo para lograr un respaldo parlamentario suficiente. Por otra parte, una fuerte movilización social liderada por la Central Única de Trabajadores (CUT), formada en 1953, así como la dura oposición política del FRAP y el PDC, pondrían a la derecha a la defensiva.

La conquista en 1949 del derecho a voto para las mujeres en todas las elecciones, la introducción de la cédula única electoral que acabaría con el cohecho en 1958 y la derogación ese mismo año de las restricciones al pluralismo político impuestas durante el paroxismo anticomunista de 1948, sumadas a la ley que en 1962 hiciera efectivo el voto obligatorio, condujeron a hacer realidad el sufragio universal establecido formalmente hacia cerca de un siglo. Esa expansión de la ciudadanía, sin discriminaciones ideológicas, sociales o de género, que culminaría con el cambio de la edad mínima requerida para votar de los veintiún a los dieciocho años y con la extensión del sufragio a los analfabetos en 1970, amplió las posibilidades efectivas de participación política institucional de todos los sectores del país.

DEL SESQUICENTENARIO DE LA REPÚBLICA AL NAUFRAGIO DE LA DEMOCRACIA

En 1960 se conmemoraron los 150 años de la república y de vida política independiente. Aunque parecía lejano el término del siglo XIX, producido simbólicamente en 1910, todavía perduraban estructuras agrarias y prácticas culturales de origen colonial; pero se había masificado el acceso a tecnologías como la radio y el cine que estaban modernizando y globalizando el imaginario de la sociedad y de sus integrantes.

Asimismo, en los años sesenta las relaciones internacionales comienzan a anticipar la globalización, en cuanto se va dando un ordenamiento y vinculación estrecha entre países de diversas partes del planeta en relación a proyectos, sistemas e ideologías definidas y contrapuestas a nivel planetario. Ciertos procesos históricos, producto de la polarización ideológica, como, por ejemplo, la Revolución cubana de 1959 y la réplica estadounidense de la Alianza para el Progreso, inciden directamente en la manera de imaginar la nación en América Latina y, desde luego, en Chile.

Por otra parte, ese contexto internacional ordenado en la lógica de Guerra Fría, en términos de alineamiento en bloques y diferenciación dicotómica entre estos, permite abrir otro debate que incide en el modo de concebir la nación y las identidades colectivas, pensándolas en su vinculación y definición respecto de realidades y conceptos globales como capitalismo, imperialismo, democracia o comunismo.

Si bien desde el centenario se observa la incorporación de nuevos actores a la esfera pública, integrando el debate de lo nacional, este proceso se profundiza en torno al sesquicentenario. Es decir, además de la previa incorporación paulatina de sectores medios y, en menor grado, de sectores populares en décadas anteriores, ahora se produce la incorporación más fuerte de las mujeres, de los jóvenes y de los sectores populares urbanos en el escenario de decisiones políticas y de demandas ciudadanas. La entrada de nuevos actores, o la evolución de algunos ya incorporados, complejizó aún más el escenario sobre el cual se pensaba la nación, y también se sumaron nuevas versiones de la identidad chilena por parte de actores históricamente excluidos.

En ello sería decisivo el papel de una pléyade de intelectuales y artistas, hombres y mujeres de origen mesocrático y popular, urbano y rural, que llegaría a ser el segmento más dinámico de la elite cultural. Y en ese sector, la influencia socialista y comunista se había agregado, desde la década de 1930, al histórico predominio de instituciones como la Iglesia Católica y la Masonería en la formación de su imaginario.

La década de 1960 se caracterizó por el surgimiento, con fuerte apoyo social, de dos proyectos alternativos de transformación

profunda de la sociedad chilena que alcanzarían el gobierno sucesivamente en 1964 y 1970. El primero de estos, implementado por el Presidente demócratacristiano Eduardo Frei Montalva, sería la «revolución en libertad»; el segundo, intentado por el Presidente socialista Salvador Allende, la «vía chilena al socialismo».

Uno y otro coincidían en el diagnóstico de los principales obstáculos al progreso nacional: el control extranjero de la gran minería del cobre y el atraso del agro, atribuidos a la estructura de la propiedad rural y a las relaciones sociales imperantes en el campo. Asimismo, coincidían en promover la incorporación al proceso político de los sectores sociales hasta entonces excluidos (campesinos y marginales urbanos).

En lo que no coincidirían sino parcialmente sería en los caminos de superación de los problemas diagnosticados y, sobre todo, en la orientación ideológica de los cambios profundos en que estaban empeñados.

La desestalinización que comenzó a abrirse camino en el movimiento comunista mundial a partir de 1956, en Chile dio un fuerte impulso al despliegue de un discurso centrado en la posibilidad de la vía pacífica y pluralista al socialismo. Así, a pesar de la continuidad de su adhesión acrítica a la Unión Soviética —como lo demostraría el respaldo que entregaría ese mismo 1956 a la intervención militar en Hungría y doce años después al aplastamiento de la Primavera de Praga—, el comunismo chileno hizo una valoración cada vez mayor de las posibilidades abiertas por la institucionalidad democrática del país para la realización, dentro de sus marcos, de un proceso revolucionario orientado al socialismo. Esta perspectiva no haría más que profundizarse entre 1958 y 1970, período en el cual se produjo una efectiva democratización política en Chile, iniciada con el fin de la proscripción de los comunistas y las reformas electorales que hicieron realidad por primera vez el sufragio universal proclamado casi un siglo antes.

Sin embargo, el pc chileno tendría que enfrentarse en el propio campo de la izquierda a un creciente escepticismo acerca de la posibilidad de avanzar al socialismo mediante elecciones, expresado en la influencia del discurso ideológico inspirado en la Revolución cubana de 1959 sobre el Partido Socialista,

que se haría, paradójicamente, más fuerte a medida que la historia real se aproximaba a concretar esa posibilidad.

En las elecciones presidenciales de 1964, el demócratacristiano Eduardo Frei obtuvo el 56%, imponiéndose al candidato del FRAP, Salvador Allende, quien obtendría el 39%. El candidato radical alcanzaría sólo un 5% al perder los votos de la derecha que se sumaron a Frei, con el propósito de impedir el triunfo de la izquierda, aunque rechazaban su programa. La contienda electoral estuvo caracterizada por una masiva «campana del terror» en contra de Allende, que contó con financiamiento estadounidense, orientada a identificar a la izquierda chilena con las dictaduras comunistas de la Unión Soviética y de Cuba. Esa campaña abriría un abismo entre la Democracia Cristiana y la izquierda, traducido en un fuerte antagonismo entre el Partido Socialista y el PDC.

Durante el gobierno de Frei Montalva (1964-1970) se impulsó una reforma agraria que modificaría profundamente la estructura de la propiedad rural, al tiempo que el país se asoció a la propiedad de la gran minería del cobre, con cuyos beneficios se intentó implementar una modernización económica en que participaran el Estado y los empresarios nacionales.

Asimismo, promovió la organización de los campesinos, mujeres y sectores populares urbanos, quienes adquirieron un protagonismo hasta entonces desconocido en la vida política y social del país. La sindicalización campesina, establecida por ley e impulsada por el gobierno, creció de algo más de 1.000 personas hacia 1964, y llegó a superar las 100.000 en 1970. La política de promoción popular, orientada a transformar la «masa marginal» en «pueblo organizado», tuvo como resultado la creación de organizaciones locales en las que llegarían a participar más de un millón de personas, también beneficiadas por programas estatales de educación popular.

Junto a ello se impulsó una reforma del sistema educacional orientada a lograr ampliar significativamente la cobertura de la educación primaria y secundaria. Asimismo, se emprendió un ambicioso programa de construcción de viviendas para los sectores populares.

La reforma agraria, que transformaría profundamente al Chile rural, fue posible gracias a una reforma constitucional

apoyada en el Congreso, en 1967, por el PDC y la izquierda, que establecería la subordinación del derecho de propiedad al cumplimiento de su función social. Esa reforma sentaría así mismo las bases para una posible socialización de otros sectores de la economía, si en el futuro se diera una mayoría parlamentaria dispuesta a legislar en ese sentido.

La reforma agraria y el cambio constitucional que la precediera transformaron a la derecha, reagrupada en 1966 en el Partido Nacional, y a los gremios empresariales en duros antagonistas del gobierno reformador, al que percibían poniendo en movimiento un asalto generalizado a la propiedad; mientras que la izquierda, por el contrario, denunciaba la debilidad e insuficiencia de las políticas reformistas en orden a favorecer a las mayorías, al no estar dispuesto Frei a rebasar los límites de una economía social de mercado.

La izquierda levantaría nuevamente la candidatura de Salvador Allende para las elecciones presidenciales de 1970, agrupada en una nueva coalición —la Unidad Popular— que sumaría a socialistas y comunistas, radicales y un grupo escindido del PDC en 1969, junto a otras formaciones menores. Postulaba que la solución a los problemas económicos y sociales del país requería superar los límites del capitalismo dependiente e iniciar la construcción del socialismo.

Entre 1967 y 1970, la izquierda lograría posicionarse como la portadora de los deseos de cambio profundo, que harían suyos buena parte de los nuevos movimientos sociales surgidos durante el gobierno de Frei, cuyas expectativas sólo estaban siendo satisfechas parcialmente por las políticas del gobierno, en un contexto en que la expansión de la organización y politización de las mayorías ciudadanas evidenciaba la insatisfacción generalizada por los límites del crecimiento económico y la continuidad de la concentración de la riqueza, en contraste con la pobreza no superada de amplios sectores populares cada vez más organizados y concienciados acerca de sus derechos.

En la elección presidencial de 1970 se enfrentarían los candidatos portadores de tres proyectos alternativos correspondientes a la derecha, el centro democristiano y la izquierda, imponiéndose esta última con un 36%, seguida estrechamente

por la derecha, un 35%, quedando el PDC relegado al tercer lugar, con un 28%.

La primera mayoría relativa obtenida por el candidato de la izquierda, Salvador Allende, le abriría el camino hacia la Presidencia tras lograr el respaldo del PDC en el Congreso Nacional, llamado a definir entre las dos primeras mayorías, al no haber alcanzado ninguna de las candidaturas la mayoría absoluta en la votación popular.

Para lograr ese respaldo del PDC, Allende y la Unidad Popular debieron plasmar en una reforma constitucional el compromiso de realizar su programa de gobierno con estricto respeto a las prácticas democráticas, el pluralismo político y los derechos y libertades ciudadanas. Esa reforma constitucional convirtió la institucionalidad jurídico-política chilena en una de las más avanzadas del mundo desde el punto de vista democrático. Sin embargo, lo que no fue comprendido por una parte de la izquierda fue que ese acuerdo hacía del respeto a la Constitución y la legalidad un requisito indispensable para el éxito del proyecto revolucionario. Tampoco comprendería ese sector de la izquierda, incluyendo a la mayoría del Partido Socialista y al nuevo Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), formado en 1965 y situado a la izquierda de la coalición, que ello exigía algún tipo de entendimiento con la Democracia Cristiana respecto de los cambios radicales de la economía y la sociedad impulsados por el gobierno.

Por su parte, Allende, junto a sus más cercanos asesores, al Partido Comunista y a un sector minoritario de su propio partido, aunque perseveraron en impulsar la transformación socialista en los marcos constitucionales y legales, no tuvieron éxito en lograr acuerdos con el PDC para emprender por la vía legislativa la socialización de los principales sectores de la economía chilena. En ello no sólo incidió la intransigencia de una parte de la propia coalición de gobierno, sino el peso en la Democracia Cristiana de su sector conservador, encabezado por Frei, profundamente anticomunista en lo ideológico y partidario de una economía social de mercado, en lugar del socialismo comunitario al que adhería el sector progresista de este partido.

La vía chilena al socialismo había sido concebida por Salvador Allende durante la década de 1960 como un proceso

revolucionario que sería desencadenado mediante su elección como Presidente de la República por la ciudadanía y dirigido por un gobierno popular sustentado en una amplia alianza de partidos de izquierda e izquierdizados, articulada en torno a comunistas y socialistas, así como en el respaldo de las organizaciones sociales de obreros, campesinos, pobladores, intelectuales, jóvenes y mujeres.

Ese proceso de transición del capitalismo dependiente al socialismo, que implicaba nada menos que el relevo en el poder de la oligarquía por el pueblo, el desplazamiento de la hegemonía de la burguesía por la clase trabajadora y la construcción de una nueva economía predominantemente socializada y planificada, se haría en Chile de modo pacífico y en el marco del Estado de Derecho que garantizaría el respeto a las prácticas democráticas, al pluralismo político y a las libertades ciudadanas.

Esa voluntad de hacer la revolución, en el sentido de llevar a cabo un cambio radical del orden económico y social existente y a la vez respetar y hacer respetar la institucionalidad jurídico-política vigente, hizo de la vía chilena de Allende —tras su triunfo electoral y su ratificación como Presidente electo por el Parlamento en 1970— una experiencia inédita en la sucesión de revoluciones socialistas u orientadas al socialismo que jalonaron la historia mundial del siglo xx.

Desde antes de asumir la Presidencia, Allende debió encarrar los intentos de una extrema derecha militarista, con respaldo estadounidense, de impedir mediante la violencia el acceso al gobierno del candidato ganador, que llegaron hasta el asesinato del comandante en jefe del Ejército para precipitar una crisis institucional, incluso antes de que el nuevo Presidente electo asumiera la conducción de la república.

La tensión entre el proceso histórico real y su elaboración ideológica afectaría, en esos años, con particular fuerza al conjunto de los liderazgos y organizaciones políticas chilenas. En el campo de la izquierda, el propio Presidente Allende mantendría, no sin dificultad, su afirmación de la vía chilena en su Partido Socialista, seducido por el modelo cubano y dominado por un liderazgo que proclamaba la inevitabilidad de una resolución violenta del problema del poder en el marco de una

lectura más radical de la realidad chilena desde el marxismo leninismo. El comunismo chileno no estaba dispuesto a transgredir la adhesión a la doctrina de las leyes generales de la transición y particularmente a la imprescindible dictadura del proletariado en alguna etapa de la transición al socialismo, a pesar de que en la práctica la vía al socialismo, que tanto había contribuido a hacer realidad, difícilmente se dejaba atrapar en prescripciones construidas a partir de la elaboración ideológica de experiencias exitosas de toma del poder por los comunistas en contextos enteramente diferentes al de Chile. Por su parte, la Democracia Cristiana, tras haber ampliado la democracia e iniciado las reformas sociales y económicas profundas durante el gobierno de Frei Montalva, se orientará, entre 1970 y 1973, a una convergencia con la derecha sustentada en la percepción de que la profundización de esas reformas por la Unidad Popular conducía al totalitarismo. Y la derecha, tras un discurso de defensa de la democracia contra el marxismo, echaría las bases de una alternativa de poder dictatorial.

El gobierno de Allende intentó, con un respaldo que osciló entre algo más de un tercio y cerca de la mitad de la ciudadanía (obtendría el respaldo de un 36% de la población en 1970, de cerca de un 50% en 1971 y de un 43,5% en 1973), emprender una transformación radical de orientación socialista del sistema económico del país. Nacionalizó la gran minería del cobre, extendió la reforma agraria, estatizó el sistema financiero y la mayoría de las principales industrias del país. Con ello reforzó el papel del Estado como principal agente económico, reduciendo y subordinando al sector privado.

Solamente la nacionalización del cobre logró el respaldo unánime del Congreso, incluyendo además del PDC a la propia derecha. Asimismo, la reforma agraria fue profundizada y acelerada en los marcos de las normas establecidas durante el gobierno de Frei. En cambio, para crear el área social de la economía en el ámbito industrial y en la esfera de la distribución, Allende no contaría con mayoría parlamentaria y debió hacer uso de medidas administrativas que —a pesar de formar parte de la legislación vigente— fueron consideradas por el conjunto de la oposición como resquicios legales destinados a imponer un proyecto revolucionario carente de respaldo mayoritario.

Esas medidas y la orientación ideológica que el gobierno imprimió al conjunto de las políticas públicas desencadenaron una fuerte oposición en los sectores de la sociedad afectados por ellas o que discrepaban de la orientación que las inspiraba. La polarización política se expresó en las instituciones y a través de todo el tejido social, generando un estado de movilización y antagonismo creciente entre partidarios y adversarios del gobierno, que llegaría a un nivel crítico a fines de 1972. A ello se sumaría la situación, también crítica, en lo económico, producto de los enormes problemas que involucraba la transición de una economía capitalista a una socialista, de las diferencias al respecto en la coalición gobernante y de las resistencias que oponían los agentes económicos privados en el país y en el ámbito internacional.

La polarización, que atravesaría a la sociedad chilena en esos años, fue acicalada por el clima de confrontación ideológica global entre los bloques internacionales de la época, la cual se expresaba en la región en el antagonismo entre la potencia hegemónica en el hemisferio y los movimientos de izquierda que habían adquirido una mayor fuerza en América Latina desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959.

La oposición a Allende contó con un fuerte auspicio norteamericano, desde el apoyo a un intento de frustrar su llegada al poder que acabaría en el asesinato del comandante en jefe del Ejército, René Schneider, en octubre de 1970, hasta el encubierto respaldo a los partidos, los medios de comunicación y la movilización social opositores, orientado a hacer ingobernable el país desde el segundo semestre de 1972.

En ese contexto, con el favor o la aquiescencia de la mayor parte de los opositores a Allende, y ante la impotencia de ese 43,5 % de la ciudadanía que favoreciera al gobierno en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, tras varias semanas de una huelga insurreccional encabezada por los gremios empresariales, a la que se sumaría el conjunto de los opositores, una conspiración militar culminó el 11 de septiembre de ese año con un golpe de Estado que involucró al conjunto de las instituciones armadas y a la cabeza del cual se situó el general Augusto Pinochet. Este condujo la instalación en el país de una dictadura, prolongada por más de dieciséis años, que impondría

con mano de hierro una metamorfosis de la economía y la sociedad chilenas en un sentido diametralmente opuesto al predominante en las décadas anteriores.

EL NACIONAL-GLOBALISMO¹² Y LA REESTRUCTURACIÓN AUTORTARIA DE LA SOCIEDAD (1973-1990)

La instalación del régimen militar implicó la expulsión de los representantes de la ciudadanía de las instituciones del Estado, la prohibición de la actividad de los partidos políticos, el control de los medios de comunicación, así como la privación de autonomía de las organizaciones de la sociedad civil. Al mismo tiempo se establecieron severas restricciones a las libertades y derechos de las personas.

Una concentración formidable del poder en la Junta Militar, que se atribuyó los poderes Ejecutivo, Legislativo y Constituyente, a la vez que sometió al Poder Judicial en el marco de un imaginario estado de guerra, fue seguida por la concentración del poder de la propia Junta en manos de Pinochet.

El aspecto más trágico del quiebre del Estado de Derecho y la concentración del poder fue la violación de los derechos a la integridad física y a la vida de los partidarios del gobierno de puestro, así como de quienes intentarían organizar una oposición al régimen en los años siguientes. Para ello se conformó una policía secreta con poderes ilimitados para vigilar y castigar a los opositores reales o potenciales dentro e incluso fuera del país.

La vasta escalada de la represión bajo el régimen pinocheta tuvo un trágico saldo de entre 3.500 y 4.000 muertos y desaparecidos, cerca de 150.000 detenidos y prisioneros políticos, muchos de los cuales fueron torturados, a los que se sumaron

¹² He acuñado el concepto de *nacional-globalismo* para caracterizar al régimen de Pinochet, por la convergencia en su discurso y en sus prácticas de un cerrado nacionalismo militarista de rasgos totalitarios, por una parte, y una concepción de que la «grandeza de la nación» requería la plena apertura de Chile al capitalismo global, por la otra. Cfr. Alfredo Riquelme Segovía: *Rejo atardecer. El comunismo chileno entre dictadura y democracia*. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2009, p. 21.

alrededor de 200.000 exiliados, en un país de unos 10 millones de habitantes en 1973. El terror de Estado se desplegó como un proyecto sistemático, orientado a destruir un modo de vida política y socialmente democrático, profundamente arraigado en la historia de las pasadas décadas, para instalar sobre el miedo y la fragmentación un orden autoritario y excluyente¹³.

El uso del terror se fundaba en una ideología de «seguridad nacional» radicalmente anticomunista y opuesta también a la democracia liberal en lo político, combinada crecientemente con un neoliberalismo extremo en su visión de la economía chilena y de su inserción en la economía global¹⁴.

La dictadura *nacional-globalista* de Pinochet implementó una profunda metamorfosis de la estructura y funcionamiento de la economía y de la sociedad, inspirada en una concepción que hizo del mercado el elemento central, no sólo de la asignación de recursos, sino de la propia integración social. Fue así como el capital privado se convirtió en el agente fundamental del proceso económico. A la restitución a sus propietarios de las empresas estatizadas durante el gobierno de Allende se sumaría posteriormente la privatización de grandes empresas públicas creadas por el Estado y que habían sido propiedad de este durante toda su existencia. Se puso fin a los controles de precios internos y se redujeron progresivamente las barreras arancelarias que protegían la producción nacional de la competencia externa. Se liberalizó el mercado de capitales y se incentivó la inversión extranjera. Se adoptaron medidas en ese mismo sentido en áreas como el urbanismo, el transporte y el medio ambiente. En el ámbito social, el Estado focalizó sus políticas en los sectores de extrema pobreza, en tanto traspasó la administración de los fondos previsionales de los trabajadores a empresas con fines de lucro y

fortaleció asimismo la participación del sector privado en salud y educación.

El bloque en el poder, conformado por los jefes militares subordinados al dictador, la elite económica y los profesionales y tecnócratas asociados a su gobierno, se proponía la institucionalización del régimen dictatorial encabezado por el general Pinochet hasta fines de siglo, y se situaba en la perspectiva de un régimen de democracia restringida y militarmente tutelada de carácter permanente. Esta nueva institucionalidad surgía en franca ruptura con la cultura política chilena histórica y se basaba en el propósito de proteger el modelo económico impuesto y asegurar de modo duradero el predominio de las elites económica y tecnoburocrática engendradas durante la dictadura.

Para ello, a través de un plebiscito sin registros electorales y en el cual la cantidad de electores declarada en varias provincias excedió el número de mayores de dieciocho años residentes entonces en ellas, el régimen autoritario encabezado por Pinochet impuso en 1980 una nueva Constitución que prolongaba su gobierno más allá de 1988. Esperaba que ese año un nuevo plebiscito lo ratificara en el mando por ocho años más. Pero en el marco de la crisis económica de la primera mitad de los ochenta y sus devastadores efectos sociales, la oposición desbordó desde 1983 las severas restricciones impuestas desde hacía una década a la expresión de la disidencia, creándose una prolongada confrontación política y social.

Entre mayo de 1983, cuando se realizara la primera protesta social masiva contra la dictadura, y septiembre de 1986, cuando una unidad de combate del Frente Patriótico Manuel Rodríguez —organización político-militar creada por el Partido Comunista a fines de 1983— intentara sin éxito matar a Pinochet, Chile vivió una intensa pugna entre amplios sectores de la sociedad que luchaban por derribar al régimen a través de las más diversas formas de movilización social, por una parte, y quienes lo sostenían con todo el poder coercitivo del aparato del Estado y el abrumador control ejercido en los medios de comunicación. La sociedad chilena se dividió políticamente de un modo tanto o más intenso que entre 1970 y 1973, mientras se desbordaban los límites impuestos a la actividad política, a pesar de la utilización sistemática de las más variadas

¹³ Véase Steve Stern: *Recordando el Chile de Pinochet en vísperas de Londres 1998*. Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, 2009, pp. 24 y 202-205.

¹⁴ Llamo neoliberalismo a la ideología que considera la libertad de emprender, característica de la economía de mercado, como el fundamento del progreso, se opone a regular el mercado nacional o globalmente, y rechaza toda intervención estatal con fines redistributivos. En sus versiones más extremas, el funcionamiento del mercado es considerado como una ética en sí misma, capaz de actuar como guía para todos los comportamientos humanos.

formas de violencia represiva y lesiva (masiva y selectiva, legal y clandestina) desde el Estado, con el propósito de anular a los opositores.

La oposición coincidía en las acciones de movilización antidictatorial, pero divergía respecto a las estrategias para abrir el camino a la democracia. El POC impulsaba la combinación de la movilización pacífica con la negociación con el bloque en el poder. Un sector de los socialistas, junto a otras formaciones de izquierda, creía que la movilización social permanente podría conducir a una crisis del régimen. Por su parte, otro sector socialista y el MIR coincidían con el Partido Comunista en la tesis de que era necesario sumar a la movilización acciones armadas para provocar la caída del régimen.

El propio bloque en el poder se organizaría, desde 1983, en asociaciones que alero del gobierno adquiritrían la forma de partidos políticos para confrontar a los opositores. Los principales serían la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Movimiento de Unión Nacional (MUN), organizaciones en torno a las cuales ha seguido articulada la derecha chilena hasta la actualidad, la primera con el mismo nombre y la segunda con el de Renovación Nacional (RN), tras el frustrado intento de unificación de ambos partidos con este nombre en 1987.

Finalmente, la salida al empate catastrófico entre adversarios y partidarios del régimen llegaría con el mayoritario rechazo de la ciudadanía, en el plebiscito de octubre de 1988, a la continuidad de Pinochet como jefe del Estado, seguido, al año siguiente, por un acuerdo entre el gobierno y la mayor parte de la oposición en torno a reformar parcialmente la Constitución de 1980 en un sentido democrático.

Durante toda la década de 1980 se confrontaron en Chile dos diseños transicionales que involucraban visiones antagónicas del statu quo existente en el país tras el golpe militar de septiembre de 1973, así como finalidades opuestas en relación al sistema sociopolítico al cual se aspiraba a llegar.

La dictadura y sus partidarios, escudados en la Constitución de 1980 y en el poder fáctico de las Fuerzas Armadas, aspiraban a institucionalizarse a partir de 1989 como una autodenominada «democracia protegida». En ella, si bien se reconocían las instituciones del sistema político liberal, quedaban supeditadas

al poder de veto de organismos burocrático-militares como el Tribunal Constitucional y el Consejo de Seguridad Nacional, al tiempo que se consagraba la exclusión de la izquierda y su más completa separación del ámbito político y la esfera social. Asimismo, se estatuyó un hiperpresidencialismo y se degradaba el poder del Parlamento. Finalmente, en los niveles regional y local, se entronizaban formas de representación corporativista opuestas al principio de soberanía popular.

La oposición democrática, por su parte, desconociendo toda legitimidad al régimen autoritario y su diseño institucional, aspiraba a construir un gran consenso social y político por la democracia. Inspirada en la memoria histórica de la sociedad y sustentada en el creciente respaldo de vastos sectores medios y populares, que se sacudían el conformismo y el miedo, organizaba la movilización social con el propósito de hacer ingobernable el país y forzar de tal manera la ruptura del blindaje del autoritarismo. Su finalidad no era otra que el desmoronamiento de la institucionalidad impuesta y su reemplazo por estructuras propias de un Estado de Derecho democrático.

La irrupción de las mayorías en el proceso sociopolítico, a partir del ciclo de las protestas nacionales, abierto en mayo de 1983, llevó a pensar durante algún tiempo que el derrocamiento de Pinochet y el derrumbe de la estructura regimienta mediante la desobediencia civil constituían objetivos alcanzables.

En ese contexto, en el país se sucedían las jornadas de protesta, se rearticulaba el sistema de partidos y se reactivaba la organización social. Así, en 1983 se estructuraba la Alianza Democrática (un amplio arco de fuerzas políticas que iba desde la derecha democrática hasta el socialismo renovado), el Bloque Socialista (agrupaba al socialismo de la Alianza y a otros grupos de izquierda) y el Movimiento Democrático Popular (congregaba a comunistas, socialistas doctrinarios y otros grupos de izquierda radical). Simultáneamente, en el terreno social, al protagonismo de los históricos movimientos sindical y estudiantil se sumaban los colegios profesionales y emergían los pobladores como actores centrales de la movilización antidictatorial.

Sin embargo, la dictadura hizo uso de todo el enorme poder de que disponía para frustrar los propósitos opositores. La

violencia del Estado cayó sobre la sociedad movilizada. A la acción permanente de los organismos de seguridad y la policía se agregó la intervención masiva de militares en la represión de las manifestaciones populares antigubernamentales. Ello significó la muerte de más de un centenar de personas durante las jornadas de protesta de aquel período. Asimismo, miles de personas fueron hechas prisioneras, torturadas, allanadas y/o relegadas en el curso de este ciclo confrontacional.

La belicosidad del régimen autoritario contribuyó poderosamente a agrietar la unidad de la oposición, la cual, hacia 1985, parecía dividida entre quienes empezaban a privilegiar llegar a un consenso más amplio que incluyera a partidarios del régimen en la búsqueda de una salida que pusiera fin a una confrontación político-militar que amenazaba con agudizarse hasta extremos catastróficos, y aquellos otros que impulsaban una réplica militarizada a la acción represiva del aparato militar estatal.

Finalmente, ambas alternativas fracasaron. No se conformó un bloque liberalizador que incluyera a los moderados del gobierno y la oposición, porque aquellos, supuestamente llamados a escindirse del régimen, no estuvieron dispuestos y mantuvieron su adhesión al dictador y a la institucionalidad autoritaria. Ni tampoco lograron su objetivo los impulsores de la rebelión armada, porque la sociedad movilizada no estuvo dispuesta a seguirlos en una estrategia condenada a un fracaso trágico frente a un adversario militarmente inexpugnable.

Así, cuando a finales de 1986, el dictador, ensobrecido tras el frustrado intento de darle muerte, notificaba a la sociedad silenciada bajo el estado de sitio su inexorable decisión de no ceder un ápice a las demandas de la oposición y continuar por el camino trazado en la Constitución autoritaria, los adversarios del régimen se vieron forzados a rediseñar sus estrategias para poner fin a la dictadura y abrir paso a la democracia. De este modo, sin alterar sus propósitos de transitar efectivamente a la democracia y sin dejar de mantener el rechazo de principio al diseño de transición autoritaria desde el régimen militar hacia la «democracia protegida», comenzó a imponerse en la oposición la convicción de que la única salida posible al empate catastrófico en que había devenido la estrategia de movilización

social tendiente a la ingobernabilidad debía realizarse en el propio marco de las condiciones creadas por la Constitución de 1980.

Sería, pues, en ese marco que se enfrentarían —una vez cancelados los sueños de una reforma democrática que la dictadura no estaba dispuesta a conceder y de una ruptura democrática que la oposición no podía imponer— en el plebiscito de sucesión presidencial los mismos diseños transicionales que se habían confrontado a lo largo de la década: el continuismo autoritario y la transición efectiva a la democracia.

El plebiscito de 1988, evidentemente, formaba parte del diseño de transición autoritaria. Había sido ideado como un modo de legitimación popular del régimen y de su conductor, mediante el cual se abriría paso la institucionalización definitiva de una «democracia protegida». Sin embargo, la fuerza que durante la década había logrado el diseño de transición democrática en la sociedad civil posibilitó que la oposición otorgara un significado diferente: el triunfo del No implicaba, además del rechazo a Pinochet, un mandato del pueblo soberano de impugnación de la institucionalidad autoritaria y de apertura hacia la transición democrática.

Con ello, este acto electoral fue resignificado como el primer acto de recuperación definitiva de nuestras libertades y nuestra soberanía como pueblo. Y el voto No fue definido explícitamente por la Concertación de Partidos Políticos por el No como manifestación de la voluntad de un efectivo retorno a la democracia, que contemplaría la realización de elecciones libres de Presidente de la República y de un Congreso Nacional con facultades constituyentes, plena vigencia de los derechos humanos y supresión de todas las normas de proscripción ideológica y de entramamiento del ejercicio de la soberanía popular¹⁵.

Hasta 1973, nuestra historia republicana había sido, a pesar de retrocesos parciales y más o menos transitorios, un camino de progreso de las libertades y derechos de la ciudadanía. Ello significó que el acceso a las instituciones y posiciones de liderazgo político y cultural fuera dejando de ser privilegio de las

¹⁵ «Declaración constitutiva de la Concertación de Partidos Políticos por el No» (2 de febrero de 1988). En *Apri*, N° 238, 8 al 14 de febrero de 1988.

definitorio del futuro político de Chile. En esa ocasión se fijó, más allá de los candidatos electos y perdedores, el espacio y la fuerza política que, como punto de partida, enmarcaría el proceso de reconversión democrática del Estado chileno.

Se abrió entonces un nuevo período caracterizado por la tensión: entre las iniciativas de cambio democrático y los reductos de conservación autoritaria, en un marco definido por la existencia de un gobierno democrático y una mayoría parlamentaria que lo apoyaba, aun cuando esta mayoría resultó insuficiente para llevar a cabo modificaciones institucionales de fondo, para las cuales se hubiera requerido del acuerdo de la oposición o de parte de ella.

El proceso de transición a la democracia en Chile y las transformaciones ideológicas de los protagonistas que lo hicieron posible, se desarrollaron en un contexto histórico marcado, a nivel mundial, por el fin de la llamada Guerra Fría, particularmente por el derrumbe del comunismo en Europa del Este y la Unión Soviética entre 1989 y 1991.

Desde 1990, en Chile se restableció el gobierno democrático. Sin embargo, la modificación parcial de la Constitución en 1989 dejaría en pie un conjunto de normas e instituciones heredadas del régimen anterior, conocidas como «enclaves autoritarios». El propio general Pinochet conservaría hasta 1998 la comandancia en jefe del Ejército.

A pesar del pacífico final que tuvo la dictadura de Pinochet, los horrores padecidos por la sociedad chilena durante los diecisiete años de ese régimen provocaron una profunda desmoralización, agravada por la impunidad de que habían gozado los violadores de los derechos humanos.

De este modo, al inicio del gobierno democrático coexistía entre los chilenos la sensación de volver a vivir un futuro abierto a la par de encontrarse aún psicológicamente prisioneros de un cprivo pasado no resuelto.

En este contexto, el descubrimiento —a mediados de 1990— de varias fosas comunes conteniendo los restos de ejecutados y detenidos desaparecidos, victimados bajo la dictadura de Pinochet, provocó una enorme conmoción moral. Aun cuando ya se conocía la existencia de tan atroces sucesos durante los largos años del régimen militar, sólo ahora el conjunto de la

sociedad se veía obligado a asumirlos en toda su terrible materialidad.

Este proceso de asimilación social de la verdad, tanto tiempo negada u ocultada, se extendería al hacerse público —en marzo de 1991— el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, constituida por el gobierno para investigar las violaciones de los derechos humanos con resultado de muerte acacidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

El establecimiento de la verdad y las ulteriores medidas de reparación y reivindicación adoptadas constituyeron un gran paso en la superación del más doloroso trauma vivido por nuestra sociedad en su historia republicana. Más allá de las dificultades que el ordenamiento legal vigente y la composición de los tribunales —ambos heredados del antiguo régimen— impusieron a la investigación judicial de tales crímenes y al castigo de los culpables, la verdad revelada y asumida contribuyó poderosamente a asentar en la opinión pública el compromiso con los derechos humanos como fundamento del régimen democrático y la convicción de que la democracia constituye la garantía para que tales horrores no ocurran nunca más.

Durante la década de 1990 se consolidaron dos grandes bloques políticos: la Concertación, una alianza de centro-izquierda mayoritaria que hasta la actualidad agrupa a los partidos Demócrata Cristiano, Socialista, Por la Democracia y Radical, la cual respaldó a los Presidentes Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010), y una alianza de derecha opositora integrada por los partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, que tras veinte años en la oposición regresaría al poder al ser elegido Presidente su candidato, Sebastián Piñera, en 2010.

En octubre de 1998, pocos meses después de su retiro del Ejército, Pinochet fue detenido en Londres a solicitud de la justicia española, para ser procesado por crímenes contra la humanidad. En marzo de 2000 regresaría a Chile, donde hasta su muerte, en diciembre de 2006, enfrentó varios procesos judiciales por esos mismos crímenes, así como por corrupción.

La peculiaridad de la redemocratización en Chile radicó en la consolidación de la mezcla de instituciones democráticas e instituciones autoritarias, producto de las 54 reformas a la Constitución de 1980, plebiscitadas en 1989.

Aunque ese híbrido constitucional fue concebido originalmente como una institucionalidad transitoria, tendió a hacerse permanente en la medida que la continuidad del proceso democratizador fue bloqueada por esa compleja y efectiva red de poderes fácticos institucionalizados conocida como «enclaves autoritarios». Estos se expresaban en la propia institucionalidad jurídico-política, actuando como un contrapeso respecto de las instituciones, agentes y procesos democráticos.

Algunas de las instituciones más importantes que configuraron la red de enclaves autoritarios, como la existencia de senadores institucionales o designados, el sistema electoral binominal mayoritario, la estructuración de los distritos y circunscripciones electorales —sumados a las exigencias de altísimos quórum para la aprobación de reformas constitucionales y leyes orgánicas—, impidieron que la mayoría electoral se tradujera en mayoría política en el Congreso, provocando una sobrerepresentación parlamentaria de la primera minoría —la derecha— y arrojando fuera del sistema político-institucional a la segunda minoría —el Partido Comunista— y otros sectores situados a la izquierda de la Concertación.

Es así como en Chile se desnaturalizó el principio liberal de balances y contrapesos, estableciéndose en la práctica una forma de ciudadanía diferenciada, con derechos especiales de representación para los sectores sociales y políticos que habían monopolizado el poder durante el régimen militar.

Chile —como otros países— inició su transición a la democracia teniendo los derechos humanos como el fundamento y finalidad ética de la acción política. Sin embargo, una década después del inicio de la transición, ese consenso en torno a los derechos humanos —sobre todo en lo que dice relación con las opciones a asumir frente al imperativo de la justicia respecto de las graves violaciones ocurridas durante la dictadura— parecía haber dado paso a su relativización frente a consideraciones de poder (las llamadas «razones de Estado»).

Ello constituyó un poderoso motivo de desencanto de la ciudadanía hacia los actores y las instituciones políticas, que incidió en el declive de la participación ciudadana en las elecciones. Motivo que no hizo más que agudizarse por las actitudes y opciones asumidas al respecto por la mayoría de los actores políticos del *establishment* durante la coyuntura generada por el arresto del general Pinochet en Londres desde octubre de 1998 hasta marzo de 2000.

Todo lo anterior se tradujo en un incremento sostenido —y acelerado después de 1993— de todas las formas de marginación del ámbito de participación que el sistema político institucional establecía para la ciudadanía: el proceso electoral. Es así como en cada tipo de elecciones (presidenciales, parlamentarias y municipales) se produjo a lo largo de los noventa un incremento de la no inscripción, la abstención y el voto nulo o blanco. De esa manera se llegó a revertir una tendencia histórica de larga duración (en realidad, tan larga como la propia república) de progresiva ampliación de la ciudadanía activa.

A partir de 1990, los gobiernos de la Concertación conservaron el esquema de mercados libres y apertura, enfatizando la inversión en infraestructura y la profundización de la inserción de Chile en la economía mundial. El cambio se produciría en el impulso a la equidad y a la disminución de la pobreza, mediante políticas públicas financiadas con alzas moderadas de impuestos.

Entre 1986 y 1997 la expansión anual media del PIB fue de 7,7%. La inflación, por su parte, descendió sostenidamente hasta niveles menores a 5%, mientras las exportaciones llegaban a representar cerca del 35% del PIB.

En una perspectiva de más larga duración, la población se había quintuplicado desde comienzos del siglo XX, hasta llegar a 15.116.435 habitantes en 2002. Las ciudades donde vivía el 43,3% de los chilenos en 1907 crecieron hasta contener a cerca de un 85% de los habitantes del país. El analfabetismo, que a comienzos del siglo alcanzaba al 60%, al finalizar este no llegaba al 5%. La mortalidad infantil, que ascendía a 267 por mil en 1910, había descendido a 10 por mil en 1997. La esperanza de vida se había extendido de 30 a 75 años. Simultáneamente, la sociedad avanzaba en el reconocimiento y valoración

de su diversidad. En el censo de 1992, alrededor de un 10% de la población declaró pertenecer a alguno de los pueblos originarios.

Con todo, seguía pendiente el desafío de superar las graves fracturas e inequidades económicas y sociales que es posible sintetizar en el hecho de que al terminar el siglo XX el 10% más rico de la población recibía cerca del 50% del PIB, mientras el 10% más pobre apenas alrededor de un 2,5%.

Acorrar esa brecha económica y social, producir bienes y servicios de mayor calidad y valor agregado, preservar el medio ambiente, terminar de construir un orden político democrático compartido y capaz de incluir a las nuevas generaciones, así como renovar la identidad nacional en esta época caracterizada por el multiculturalismo y la globalización, serían algunos de los desafíos que enfrentaba la sociedad chilena al comenzar el siglo XXI.

CHILE EN LA DÉCADA DEL BICENTENARIO

La sincronía entre el derrumbe generalizado de dictaduras que parecían inextinguibles y el ascenso de la versión neoliberal de la globalización a una posición hegemónica, encarnada en la simultaneidad de la caída del Muro de Berlín con la invención del Consenso de Washington en 1989, había conducido, durante la década de 1990, al predominio de una visión que convirtió esa contemporaneidad en una suerte de causalidad o necesidad histórica.

De ese modo, a lo largo de esa década se tendió a considerar las reformas económicas neoliberales y los cambios de orientación democrática en los ámbitos político y social como dos aspectos de un proceso único. Poco importaron el débil sustento empírico y la escasa coherencia conceptual de lo que en definitiva emergió como una creencia ideológica que hicieron suya a escala mundial las más influyentes elites económicas y políticas, inspiró las prescripciones que las organizaciones financieras multilaterales dictaron a los gobiernos de todo el planeta y —*last but not least*— fue ampliada por poderosos medios de comunicación que convirtieron en celebridades

mundiales a los intelectuales que articularon esa creencia en narrativas y propuestas.

La variedad de los derroteros económicos y políticos andados en los años siguientes por los países que entonces fueron presentados como casos nacionales de un proceso único y conducente al establecimiento de economías de mercado y democracias políticas de cuño anglosajón a escala planetaria, no tardaría en poner en cuestión esa mirada simplista y uniformadora.

Por otra parte, a la creencia en la insolubilidad entre neoliberalismo y democracia se ha opuesto una renaciente convicción ideológica inversamente simétrica, la cual afirma la incompatibilidad esencial de la apertura a la economía global con la democratización política y social.

Entre esos extremos se sitúan distintos relatos y políticas que prescriben diferentes fórmulas para «domesticar» el capitalismo o hacer «gobernable» la democracia, suministrando dosis variables de políticas públicas y de mercado —combinadas de modo cada vez más enrevesado— para conservar o restablecer la salud de las naciones. Hacia estas narrativas y propuestas se han ido desplazando las elites, medios y organizaciones globales que hacen dos décadas abrazaron la actualmente insostenible creencia en las bondades de la «autorregulación» de los mercados.

En ese contexto global, la larga transición chilena a la democracia enfrentó obstáculos enormes. La desactivación de los enclaves autoritarios fue muy lenta, principalmente por las dificultades inherentes a la transformación de una sociedad que las políticas de la dictadura hicieron tremendamente asimétrica en términos de poder y riqueza. Esa asimetría condicionó también los acuerdos constitucionales transitorios de 1989 e incidió después en su tendencia a transformarse en permanentes.

Fue sólo durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) que la sombra de Pinochet y del militarismo acabó por desvanecerse. El antiguo dictador, que había regresado a Chile de su prisión en Londres días antes del inicio del gobierno del líder socialista, debió enfrentar finalmente a la justicia chilena por sus crímenes contra la humanidad. Para eludiría se amparó en una controvertida demencia senil, que le significó tener que renunciar a su senaduría vitalicia y arriesgar una reactivación

de los procesos judiciales cada vez que salía de su ostracismo¹⁷. La difusión de una investigación encargada por el gobierno sobre la extensión y profundidad de la tortura sistemática contra decenas de miles de opositores durante la dictadura, sumada a la apertura de investigaciones judiciales por corrupción en su contra, acabaron por tornar impresentable la identificación pública con su régimen. El propio Ejército, conducido por el general Juan Emilio Cheyre, comenzó a emanciparse de ese turbio legado.

Junto con lograr restablecer la debida subordinación militar a las autoridades civiles, durante el gobierno de Lagos se completó un conjunto de reformas constitucionales que terminaron por eliminar del sistema político los enclaves autoritarios instalados por la dictadura, con la excepción del controvertido sistema electoral. Intactas quedaron, sin embargo, junto al sistema binominal que sigue distorsionando la representatividad del Congreso Nacional, las normas que dan rango constitucional a un orden neoliberal que limita severamente la acción del Estado democrático en lo económico y social.

Con todo, el gobierno de Lagos impulsó y en buena medida condujo una transformación política y cultural vivida por la sociedad chilena como de apertura a una nueva época de libertades y creatividad. A ello se sumaría una recuperación del dinamismo económico, ralentizado hacia fines de los noventa, y la suscripción de acuerdos de libre comercio con las principales economías del planeta. El clima de optimismo que caracterizó la segunda mitad del sexenio fue asimismo estimulado por una fuerte proyección política internacional del país, encarnada en el rechazo a sumarse a la guerra de Irak en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en marzo de 2003.

La metamorfosis de la economía y de la sociedad chilena introducida bajo la dictadura había dejado una profunda huella en las prácticas y en el imaginario de la sociedad, sostenida por una red ideológica y mediática que obstaculizaría cada avance social democrático que se intentara emprender desde el Estado o la sociedad civil.

¹⁷ El derrumbe político y moral de Pinochet antecedió en algunos años a su muerte, acaecida el 10 de diciembre de 2006.

Por eso, el gobierno de Lagos se propuso —sobre la base de los logros de los gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle— acortar la brecha económica y social, producir bienes y servicios de mayor calidad y valor agregado, preservar el medio ambiente, terminar de construir un orden político democrático compar-tido y capaz de incluir a las nuevas generaciones, así como re-novar la identidad nacional en una época caracterizada por el multiculturalismo y la globalización.

Al llegar a la Presidencia en el 2000, Lagos asumiría que la meta de su gobierno no era simplemente completar una democracia y un sistema de mercados competitivos que resistiesen un escrutinio de nivel mundial. Aun alcanzando estos propósitos, la historia no se detenia en las sociedades modernas, porque en estas, como ha escrito un destacado historiador de lo contemporáneo, «la idea de igualdad-universalidad de los hombres, que esgrime como fundamento y que constituye su novedad, es constantemente negada por la desigualdad de las propiedades y de las riquezas producida por la competencia entre sus miembros. Su movimiento contradice su principio, su dinamismo, su legitimidad [...]»¹⁸.

Frente al carácter problemático o contradictorio de las sociedades modernas, era preciso implementar políticas públicas para enfrentar los peligros que esa tensión entraña, a la vez que conducirla en un sentido de progreso democrático y social. Ello exigía valorar la política como ámbito de deliberación pública y de toma de decisiones respecto a cómo resolver los dilemas de una sociedad compleja que no pueden quedar entregados al mercado. Esa fue planteada como la diferencia fundamental entre la Concertación y la derecha: la convicción de aquella respecto de que existen bienes públicos que deben ser accesibles a todos los ciudadanos y no quedar librados a la posibilidad de adquirirlos en el mercado según su capacidad económica.

Durante la campaña electoral de 1999-2000, la adhesión ciudadana a Lagos se transformó en un poderoso contrapeso al enfriamiento del respaldo ciudadano a la Concertación, sus partidos y liderazgos parlamentarios, que había estado a punto de

¹⁸ François Furet: *El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo xx*. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1995, p. 18.

provocar su derrota electoral en la primera vuelta, cuando sólo el poderoso carisma del entonces candidato presidencial, sumado al rechazo al retorno al poder de una derecha que seguía liderada por los cuadros civiles del antiguo pinochetismo, salvó a la coalición gobernante de lo que hubiera sido una catástrofe política de dimensiones históricas: el desplazamiento del gobierno por la derecha sin haber sido capaz en una década de concluir exitosamente una transición a la democracia que se había hecho demasiado larga y limitada.

Lagos se propuso concluir exitosamente esa transición y demostrar a la vez que un Presidente socialista al frente de una coalición de centro-izquierda podía guiar a Chile hacia el crecimiento y hacia una inserción más profunda en la economía global.

También Lagos se presentaría como un crítico tanto del neoliberalismo, en tanto ideología fundamentalista de mercado que menospreciaría el papel de las políticas públicas¹⁹, como del populismo, que ignoraría las realidades económicas al sembrar la ilusión de que existen atajos para que el crecimiento llegue a las mayorías. Esta especie de tercera vía a la sudamericana apostaba a la sinergia entre el Estado y el mercado, y a profundizar la llamada asociación público-privada para la provisión de bienes públicos, la que durante su gobierno se materializaría en la construcción de una gigantesca red de autopistas urbanas e interurbanas, así como en una reforma de la salud que introdujo garantías explícitas para las personas²⁰.

En el escenario político, definitivamente post militarista, que se configurará a lo largo del sexenio de Lagos, durante el cual mientras Pinochet se hundía en la impotencia y el oprobio, el Presidente se fue instalando en el imaginario nacional como el líder capaz de restaurar las tradiciones y las instituciones republicanas, se produjo el ascenso de Michelle

¹⁹ Acerca del enfoque de políticas públicas en el gobierno de Lagos, cfr. Eugenio Lahera: *Introducción a las políticas públicas*. FCE, Santiago, 2002.

²⁰ Sobre el sexenio de Ricardo Lagos, cfr. Robert L. Funk (ed.): *El gobierno de Ricardo Lagos. La nueva vía chilena hacia el socialismo*. Universidad Diego Portales, Santiago, 2006. Hugo Fazio et al.: *Gobierno de Lagos: balance crítico*. Lom, Santiago, 2006. Ernesto Ottone y Carlos Vergara: *Ampliando horizontes. Síntesis de las estrategias del gobierno de Lagos*. Debate, Santiago, 2006.

Bachelet y su propuesta ciudadana en las preferencias del electorado y su nominación como candidata presidencial de la Concertación.

En esa intersección de diagnósticos y propuestas, de convicciones y *marketing*, de presiones y límites que es una elección presidencial en el mundo actual, intersección tanto más densa cuando existe real incertidumbre por el resultado como ocurría entonces en Chile, donde además coincidía con una elección parlamentaria, algunos temas se instalaron con fuerza en la agenda pública y particularmente en la confrontación entre los candidatos.

La configuración de esa nueva red de protección social se convertiría en la principal propuesta programática de Bachelet y la Concertación frente a las desigualdades e incertidumbres inherentes al modelo de crecimiento.

Ella se enmarcaría en una visión de Chile en su historicidad, instalada durante el gobierno de Lagos, que caracteriza al segundo siglo de historia nacional abierto en 1910 como una larga marcha por convertir una república oligárquica en un Estado Social y Democrático de Derecho.

El restablecimiento del gobierno democrático y del imperio de la ley en la última década del siglo XX, junto al éxito de las políticas públicas diseñadas e implementadas por los tres anteriores gobiernos concertacionistas, serían los que abrirían el camino para el reencuentro de Chile con el progreso social, haciendo posible ya el establecimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho sustentado en una economía sólida, sana y moderna que provee los recursos para expandir las libertades y las oportunidades, así como para garantizar integralmente los derechos a toda la ciudadanía.

Los resultados de la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en diciembre de 2005 y enero de 2006, fueron una victoria de la Concertación gobernante desde 1990. Fueron también expresión de la adhesión ciudadana al gobierno de Lagos, quien no vaciló en poner en juego todo su capital político para favorecer la continuidad de la coalición en el poder. Asimismo, fueron expresión de un estrecho predominio en la opinión pública del proyecto social democrático por sobre la alternativa de la derecha conservadora y

neoliberal, y de un amplio predominio de una opción de progreso gradualista por sobre la propuesta de la izquierda radical²¹.

El gobierno de Michelle Bachelet procuró, entre 2006 y 2010, materializar ese proyecto que concitó la adhesión de la mayoría, alcanzando sus principales logros en la ampliación de una red de protección social y en la perspectiva de la construcción progresiva de un renovado Estado Social y Democrático de Derecho.

Más dificultades tuvo para impulsar el empoderamiento de una sociedad civil profunda y largamente debilitada y fragmentada como resultado sucesivo y combinado de la acción de la dictadura, la metamorfosis neoliberal de la economía y la sociedad, y la insuficiencia de las propias políticas de la coalición de centro-izquierda para revertir esa asimetría de poder estructural entre las elites y la ciudadanía durante sus dos décadas de gobierno a las que los resultados de las elecciones presidenciales de enero de 2010 pusieron fin.

Esos resultados electorales que condujeron a la derecha de regreso al gobierno han abierto a la vez una interrogante sobre las nuevas formas –más o menos conflictivas– que pueda asumir en los próximos años la interacción entre el Estado, la ciudadanía y las elites.

Al preguntarnos sobre nuestra sociedad y nuestra república en la víspera del bicentenario, no podemos dejar de mencionar el problema que sigue representando para Chile la influencia desmesurada de poderes que –aunque existentes en todas las sociedades actuales– ejercen en el país una gravitación carente de contrapesos sociales o institucionales eficaces. Es así como relaciones y compromisos más o menos tácitos entre los representantes de la ciudadanía y los principales defensores del poder económico y mediático, tejidos a través del *lobbying*, han adquirido una preeminencia desmedida en la formación de la opinión y en las decisiones políticas.

²¹ Véase Alfredo Riquelme Segovia: «Chile: la elección de una Presidenta ciudadana». En *L'Ordinaire Latino-américain* (OPEALT. Université de Toulouse - Le Mirail), n° 206: «Campagnes électorales en Amérique latine, 2004-2006» (Stéphane Boisard, coord.), enero-abril 2007, pp. 179-196.

¿CÓMO NOS RECONOCEREMOS? LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA SOCIEDAD CIVIL DE CARA AL BICENTENARIO

Cecilia Osorio Cornet

El fin de una forma de pensar y hacer política no significa la muerte de la política, por el contrario. Su renovación pasa, a mi entender, por una redefinición de nuestras claves de interpretación¹.

NORBERT LECHNER

Para contrarrestar la desafección política hoy que incrementar la confianza en las capacidades de la acción colectiva. Mientras más confíen los chilenos en la posibilidad de incidir sobre el desarrollo del país, participarán en forma activa en el orden democrático².

INFORME DESARROLLO EN CHILE, 2000. PNUD

Reflexionar acerca de la política en el Chile del bicentenario es un desafío de gran magnitud. La elección sobre qué hechos, procesos o actores abordar implica opciones arriesgadas, justificables o no. Los cien años transcurridos desde 1910 hasta 2010 –ámbito temporal de este análisis– destacan por sus interesantes, trágicos y significativos sucesos. El entorno que guía las siguientes páginas debe ser, si no justificado, al menos explicitado.

La premisa inicial que explica los temas a abordar alude a la relevancia de la política en la sociedad chilena, expresada en dos grandes ámbitos desarrollados en este ensayo. En primer lugar, la estrecha vinculación y presencia de los partidos políticos en el espectro social, buscando identificar sus principales características desde el centenario hasta hoy. En segundo

¹ Lechner, Norbert. *Obras escogidas I*. Santiago de Chile, Lom, 2006, p. 505.

² PNUD: *Desarrollo humano en Chile, 2000. Más sociedad para gobernar el futuro*. Santiago de Chile, PNUD, 2000, p. 203.